



Esta semana en que por fin se han puesto en marcha profundas reformas estructurales como la Reforma Agraria y la Nacionalización de la Banca ha vuelto a estar caracterizada por la violencia represiva. Esa violencia que desde el primero de Enero hasta el 29 de Febrero había causado no menos de cuatrocientos muertos atribuibles principalmente a los Cuerpos de Seguridad, pero también a la Fuerza Armada y a los grupos paramilitares de derecha, ha seguido imperando en el país.

Al final de la semana pasada aparecían 8 cadáveres en Apulo; el lunes se anuncian las muertes de dos presuntos miembros de las FPL y una ocupante de una Iglesia en San Miguel. Se asesina el lunes al undécimo maestro y miembro de ANDES en lo que va de año y en los días siguientes a unomás. A raíz del ataque del ERP al cuartel de la Guardia Nacional, pero sin tener que ver nada con ese ataque aparecen doce cadáveres en la Troncal del Norte, sumando el total de las víctimas diecinueve. La represión se desata asimismo en la zona de Santa Ana-Sonsonate donde en los últimos días han aparecido 20 cadáveres, varios de ellos importantes miembros de FENASTRAS, una de las Federaciones sindicales más importantes del país. El día sábado los periódicos anuncian la primera aparición de otros diez cadáveres en la capital, entre los que se encuentran un miembro de UDN y su joven esposa de nacionalidad danesa, arrojados en la carretera del Litoral. Las últimas acciones militares tras el Estado de Sitio han causado también muertes, así como los tiroteos en la ciudad. Todo ello hace que en esta semana aparezcan asesinados un número no inferior a setenta. Es una prueba más del ritmo de represión que se ha impuesto en el país contra integrantes de las organizaciones populares, tales como maestros, sindicalistas, políticos (no se olvide que el UDN es un partido oficialmente reconocido y legalizado). El promedio de muertos diario va aumentando y muestra el decidido propósito y el trazo general de una política que pretende la extinción violenta de todos aquellos que no están de acuerdo, desde la izquierda, con el proyecto de reformas propuesto por el Gobierno y propiciado por los Estados Unidos. Este es un dato fundamental para entender lo que pueden significar las reformas estructurales iniciadas esta semana.



Esta represión no se explica por las acciones de los grupos político-militares. En esta semana sus víctimas han sido tres policías en Ilobasco y otros tres o cuatro guardianes de fincas o comandantes locales; no más de diez por todos, lo que viene a mostrar la misma proporción de uno y medio por día que en los dos meses anteriores. Ha habido también otras acciones como el ataque al Cuartel de la Guardia Nacional y otras acciones de hostigamiento. Pero las setenta víctimas causadas por los Cuerpos de Seguridad y/o los llamados grupos paramilitares casi nada tienen que ver con el rechazo de estos ataques subversivos. Responden más bien a un programa general de aniquilamiento de los hombres de izquierda, que por sí mismos no hacen violencia ni la propician. Ha habido sin duda acciones de agitación como quemas de buses, algunas tomas y huelgas -sobre todo la de siete días decretada por ANDES en protesta por los maestros asesinados-, pero los asesinados no lo han sido por lo general en estas acciones.

En ese contexto de muerte y aniquilamiento es como deben juzgarse las dos importantes medidas de la Reforma Agraria y de la Nacionalización del Sistema Financiero. Ambas medidas son importantes y representan un cierto triunfo, al menos inmediato, de la Junta de Gobierno y de la Fuerza Armada contra los sectores más oligárquicos del país. Ya no son sólo promesas y amenazas sino comienzo de realidades. Ya se comenzó la expropiación en todo el país de las haciendas que superan las 500 hectáreas, lo cual afecta a unas doscientas familias de terratenientes, que siendo el dos y medio milésimos por ciento de la población nacional poseían más de 300.000 manzanas de tierra (Majano). Las propiedades entre 500 hectáreas y 100 ó 150 hectáreas, según los casos, no serán todavía afectadas y las por debajo de 100 ó 150 hectáreas, que representa más del 85% de los propietarios no serán afectados en modo alguno. La propiedad será traspasada a los que trabajan la tierra y habrá tres formas de propiedad: la estatal, la cooperativa y la privada.

Es pronto para valorar adecuadamente esta medida. Tiene de bueno que golpea a



La semana fue así (1-8, Marzo, 1980)

3

la oligarquía, que dejará de ser la gran poseedora de tierras y que recibirá el pago de sus tierras en bonos. No es lo suficientemente drástica y muestra que se lleva a cabo dentro de un esquema capitalista moderado. Tiene de bueno también que en principios los beneficios de las tierras expropiadas irán a parar fundamentalmente a manos de quienes trabajan las tierras, de los campesinos asalariados. No están excluidos de esa ventaja ninguno de los trabajadores, estén organizados o no lo estén.

Pero el proceso tiene también sus graves dudas, dejando de lado el problema técnico de si la nueva propiedad y tenencia de la tierra va a hacer disminuir la productividad. La duda principal nace de su vinculación a un proyecto más general, que tiene como uno de sus elementos esenciales la represión sangrienta y aun mortal de quienes tienen otro proyecto nacional, el proyecto del Gobierno Democrático-Revolucionario. No es sólo que se quiera quitar base a las organizaciones populares ofreciendo medidas reformistas; ésta sería una alternativa política que las organizaciones populares deberían enfrentar políticamente. Es que con el pretexto de las reformas se quiere aniquilar a lo que el coronel Majano llama izquierdaz extrema, mientras a las derechas recalcitrantes se les acosa con medidas de hecho, pero no se las reprime como a las izquierdaz. Ahora bien esas izquierdaz extrema no son extremas como lo demuestra la Coordinadora en su programa de gobierno.

Por otro lado el Gobierno debe comprender que aunque esas reformas son necesarias y deseables para las mayorías, estas mayorías no han sido tenidas en cuenta directamente. La Reforma Agraria se presenta de momento como una acción político-militar de la Fuerza Armada y, lo que es más grave, puede dar paso a una militarización sistemática de toda la República a través de las haciendas militarizadas, que posibilitarán un control y una sistematización de la vigilancia y de la represión, dirigidas fundamentalmente contra las fuerzas populares. Si no se logra que esta medida excluya toda forma de represión a los campesinos, que esta medida sea asumida por todo el pueblo, el organizado y el no organizado, no resolverá el problema y su fracaso se convertirá



La semana fue así (1-8 Marzo, 1980)

4

en una nueva arma para que la oligarquía regrese triunfante diciendo que sólo ella es capaz de salvar al país.

Algo parecido debe decirse de la Nacionalización del Sistema Financiero, aunque aquí las inconvenientes son menores. La Nacionalización del Sistema Financiero, incluso tal como se ha propuesto, es una medida convergente con el proyecto general del Gobierno Demócratico Revolucionario. Es un claro golpe a la oligarquía más fuerte y preciso que el dado con la Reforma Agraria. Demuestra que el proyecto de la Junta no es en sí oligárquico, aunque pueda seguir siendo capitalista y pro-imperialista. Sus posibles dificultades están en ser parte de un proyecto más general, tras el que están los norteamericanos que incluye la represión masiva y en correr el peligro de ser manejada la medida no en favor de las mayorías. Ambas son posibles dificultades. Los hechos demostrarán si son sólo posibles o reales. Si se logra evitar el aspecto represivo y se profundiza tanto en la Reforma Agraria como en la Nacionalización del Sistema Financiero, tal vez se pueda ir pensando en una aproximación de posiciones entre el proyecto de la izquierda y el proyecto del Gobierno. La medida de esta posible aproximación está en el cese de la represión y en la superación de las causas de esa represión.

Esta posibilidad no la han visto ni el Ingeniero Héctor Dada que renunció esta semana a la Junta ni otros miembros del Partido Demócrata Cristiano que parecen no estar de acuerdo con la dirección oficial de su partido, propensa a la represión y propensa al intervencionismo norteamericano. La renuncia del Ingeniero Dada a pesar de las medidas que él ya conocía, dejan abierta una gran duda sobre el particular. El era partidario de esas medidas. ¿Por qué entonces abandonó el puesto? ¿No sería por verlas como parte de un proyecto más general que le parecía intolerable? Sólo cuando se conozca su carta de renuncia podremos tener claridad sobre estos puntos. Y sólo cuando midamos los efectos del Estado de Sitio y cuando desaparezca totalmente la represión podremos pensar en que algo nuevo está surgiendo en el país. Algo que sólo será sólido si es respaldado por la Coordinadora.

8-Marzo-1980